

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, por Felipe Segovia en favor de su hijo Timoteo, por incomunicacion al extinguir una condena.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El juicio de amparo que intenta Felipe Segovia, á nombre de su hijo Timoteo de este apellido, tiene por objeto hacer cesar la violacion de garantías que se consignan en la parte final del art. 19, y el 21 de la Constitución general del país, cuya violacion consiste, segun se dice en el escrito con que se promueve el recurso, en que estando el mencionado Timoteo Segovia, extinguiendo una prision en la carcel pública de esta ciudad, con calidad de reo de homicidio, juzgado y sentenciado, el día 18 del mes anterior se le mandó trasladar por disposicion del C. Gefe político del partido de la capital, al cuerpo de guardia del hospital civil, en donde desde el 20 del mismo mes, y por orden de la propia autoridad política, se le puso incomunicado, pasando esa consigna, segun la disciplina militar, á las guardias que sucesivamente se han ido relevando, quienes han cumplido estrictamente con esa orden de incomunicacion en que Segovia ve un ataque á las garantías individuales de los artículos 19 y 21; respecto del primero, por la molestia que se le infiere sin motivo legal, y en cuanto al segundo, porque estima esa orden como que le impone una pena propia y exclusiva de la autoridad judicial, y no del resorte de la política ó administrativa.

Del informe del Gefe político se viene en conocimiento, que es efectiva la traslacion de Segovia al cuerpo de guardia del hospital, por razones que aquel ha creido tomar para obrar así; y aunque en ese mismo informe se niega haberse dado la orden de

incomunicacion de que se queja el padre de Segovia, ahí mismo se asegura que el Gefe político se contrajo á "encargar que el preso no tuviera visitas sino solo en los dias que el reglamento previene las tengan los presos enfermos del establecimiento;" pero nadie duda que una recomendacion de esa naturaleza equivale á una orden que es fielmente obsequiada, como nadie dudará tampoco que la incomunicacion, que es el estado de un preso á quien no se permite ver, ni hablar á las personas que fueren á visitarle, como no sea con especial orden del juez respectivo, el cual no la podrá mandar sino cuando lo exija la naturaleza de la averiguacion sumaria, y por solo el tiempo que sea realmente necesario, segun enseñan de comun acuerdo los criminalistas, es un verdadero abuso de los que habla el art. 19 constitucional, y un atentado á las garantías individuales de que en él se trata.

Por lo mismo, y á reserva de explanar estos conceptos, por no permitirlo ahora la premura con que se evacúa este traslado, erce el infrascrito que siendo notoria y flagrante la violacion de garantías de la parte final del art. 19 de la Constitución, con apoyo de los artículos 101 y 102 de esta, y quinto y sexto de la ley de 20 de Enero de 1869, debe suspenderse provisionalmente el acto que se reclama ante la Justicia Federal, y así lo pide en ejercicio del Ministerio público que representa, sin perjuicio tambien de decir lo que corresponde, llegado el caso de pedir sobre lo principal del recurso, en cuanto á la aplicacion que se hace del art. 21 del pacto federal.

Aguascalientes, Octubre 2 de 1878.—  
*E. Parga.*

Es copia que certifico. Aguascalientes,  
2 de Octubre de 1878.—*E. Parga.*

*Otro Pedimento del C. Promotor fiscal.*

*C. Juez de Distrito.*

El Promotor fiscal dice: que á pesar de haberse pedido al Gefe político del partido de la capital el informe con justificación que corresponde en este juicio de amparo promovido por Felipe Segovia á nombre de su hijo Timoteo de este mismo apellido, por violacion de garantías de los artículos 19 y 21 de la Constitucion general, aquel sin hacer uso del derecho que le concede el artículo noveno de la ley de 20 de Enero de 1869, se ha abstenido de informar con esa calidad; y en consecuencia, el expediente se pasa por segunda vez al que suscribe, exactamente con las mismas constancias con que lo recibió para que pidiera sobre la suspension inmediata del acto reclamado, y sin mas novedad que el auto en que se mandó hacer la suspension. Las razones, pues, que tuvo el infrascrito para coadyuvar la pretension del promovente, en cuanto á la repetida suspension, por estarse violando las garantías de la parte final del artículo 19 de la Constitucion, subsisten en todo su vigor, y bastan para conceder el amparo que se solicita, como fueron suficientes para suspender provisionalmente el acto reclamado; porque en efecto, la incomunicacion en que el precitado Gefe político puso al hijo del quejoso, infiriéndole una molestia y una molestia recargada á las muchas que ya pesan sobre la condicion de los presos, es un procedimiento ilegal, segun se dijo en el anterior pedimento, y ahora puede añadirse injustificable, como lo demuestra la abstencion de informar en sentido contrario, cuyo procedimiento constituye un abuso de los que habla el artículo 19 que se invoca, y un atentado á las garantías individuales.

Pero no debe decirse otro tanto de la violacion que se cree encontrar en el hecho de que se trata, del artículo 21 de la misma Constitucion, estimado como la imposicion de

una pena propia de la autoridad judicial y no de la política, para llegar á ese fin de la violacion de este artículo, la incomunicacion que motiva el recurso; porque si bien es cierto que ella causa una molestia injustificada, y como tal infringe el artículo 19 de la Constitucion por la que merece ser amparado el hijo del quejoso, tambien lo es, que esa incomunicacion sin tener el carácter de verdadera pena, porque le falta la calidad constitutiva de ser compensatoria de un delito, no pasa de una molestia que infringe, sí, el artículo 19, pero no alcanza á atacar el artículo 21, y no hay por tanto la violacion de garantías que en esto se consignan, ni es de concederse el amparo que por ellas se solicita.

Resumiendo el infrascrito Promotor, pide en conclusion á vd., C. Juez, se sirva resolver con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, y ley de 20 de Enero de 1869, que la Justicia de la Union ampara á Timoteo Segovia en el goce de las garantías de la parte final del art. 19 de la propia Constitucion, y que la misma Justicia federal no acuerda el amparo de las que se contienen en el art. 21, que no han sido violadas con el acto que exige la proteccion de aquellas.

Aguascalientes, Octubre 10 de 1873.—

*H. Parga.*

Es copia que certifico, Aguascalientes, á 10 de Octubre de 1873.—*H. Parga.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Aguascalientes, 21 de Octubre de 1873. Visto este juicio de amparo promovido por Felipe Segovia en favor de su hijo Timoteo del propio apelativo, contra la autoridad política de esta Capital, de quien se queja violó en su persona las garantías consignadas en los artículos 19 y 21 de la Constitucion federal, con el hecho de haberlo mandado trasladar de la cárcel en donde extinguía una condena de ocho años de prision

por delito de homicidio, al hospital civil, con orden á la guardia de mantenerlo incomunicado desde el día 20 del próximo pasado Setiembre, en cuyo estado permanecía el 26 del mismo mes en que se presentó el ocurrencio. Funda la violacion del artículo 19, en que la incomunicacion le infiere una molestia que dicho artículo reprueba en su parte final, y que debiendo extimarla asimismo como una pena que solo puede imponerle la autoridad judicial, ella importa una violacion del artículo 21; motivo, porque solicitaba desde luego la suspension inmediata de aquel acto. Pedido el informe correspondiente á la autoridad ejecutora, lo dió esta con fecha 2 del presente, manifestando que Timoteo Segovia fué sentenciado en 1872 á sufrir ocho años de prision por homicidio alevoso, y estaba cumpliendo su condena en el salon de la cárcel pública de esta Capital; pero como allí recibia continuas visitas de toda clase de personas, introducía el desorden en aquel establecimiento: que para evitar esto, así como tambien que sufriera maltrato de los demas presos si lo incorporaba con estos, por haber sido autoridad del Partido de Rincon de Romos, como medio prudente lo mandó trasladar al cuerpo de guardia del hospital civil, sin dar la orden de incomunicado; pero sí, con el encargo de que no recibiera mas visitas que las que se conceden á los presos enfermos del establecimiento, por no creer conveniente interrumpir el orden que allí se observa.

Practicadas las primeras diligencias, y oido el parecer fiscal, en el que pedia se decretara la suspension del acto reclamado por estar confesa la autoridad ejecutora, y por no ser legales los motivos que expone para la incomunicacion del quejoso; de conformidad con sus propios fundamentos, se decretó aquella provisionalmente, y se mandaron continuar los trámites del juicio, pidiendo el informe justificado que previene el artículo 9 de la ley de 29 de Enero de 1869. La autoridad política no dió dicho informe, y el juicio se citó para alega-

TOMO IV.—PARTE II.

tos y sentencia, previo el segundo pedimento fiscal. En tal estado, y

Considerado primero: que la autoridad política al incomunicar al quejoso, como lo hizo, no obró con motivo legal, por no serlo la simple razón que dió en su informe previo, supuesto que el desorden que dice producía en la cárcel el recibo de continuadas visitas, sería evitado por otros medios reglamentarios, sin que por esto se agravase mas la pena de los reos con una incomunicacion abusiva y contraria á las disposiciones legales, que no la consienten sino para aquellos casos en que la averiguacion de un delito la hace necesaria para descubrir la verdad y evitar la confabulacion; ó cuando por agravacion de penas la decretan los tribunales á quienes se permite esta facultad, segun el tenor del artículo 94 del Código penal del Distrito y territorios de la Federacion.

Considerando segundo: que el quejoso al asegurar en su alegato que sufrió catorce dias de absoluta incomunicacion, tiene la presuncion en su favor, toda vez que el C. gefe político no informó con justificacion en los términos de la ley, despreciando el recurso que esta le otorga para probar por este medio el motivo legal de su procedimiento, y que por tal razon debe estarse á las aseveraciones del que ha sufrido sus consecuencias, y que tiene de su parte el silencio de quien lo ejecutó.

Considerando tercero: que aunque el expresado C. gefe político manifestó, en el informe previo á la suspension inmediata, que no dió orden formal de incomunicacion, sino que al pasar á Segovia al cuerpo de guardia del hospital civil, sólo encargó no se le consintieran visitas mas que en los dias que se permitian en aquel establecimiento; tal encargo que está en contradiccion con las razones manifestadas en el considerando anterior, no solo importa una confesion del hecho reprobado en el artículo 19 constitucional, sino que procediendo de una autoridad que no podia dejar de ser obedecida,

tenía la misma fuerza de una verdadera Orden: que ella nivelaba las calidades que harían necesario un régimen basado en motivos higiénicos propios para la asistencia y curación de los presos enfermos, en los que el silencio é incomunicación no se les impone como molestia, sino para el logro de su pronta sanidad, y como medida precautoria para evitar los peligros del contagio á las personas de fuera, con los que por su perfecta salud no debían sujetarse á dicho régimen.

Considerando, cuarto y por último: que no está probado que la autoridad política impusiera la incomunicación como una pena, no hay violación del artículo 21 constitucional. Por estos fundamentos, lo pedido por el C. Promotor fiscal, y lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Constitución general, y su ley reglamentaria de 20 de Enero de 1869, el juez que suscribe falla este juicio con las proposiciones siguientes:

Primera: La Justicia de la Union ampara y protege á Timoteo Segovia, contra el procedimiento del C. Gefe político de esta Capital, que lo mando poner incomunicado en el cuerpo de guardia del Hospital Civil, por violarse en su persona la garantía consignada en la parte final del artículo 19 de la Constitución.

Segundo: La misma, no ampara ni protege al citado Segovia en la violación del artículo 21 del pacto federal, por no haber ésta.

Tercera: Notifíquese esta sentencia, y publíquese por los periódicos, y remítase con el expediente á la Corte Suprema de Justicia para los efectos legales. El C. Juez de Distrito del Estado, así lo decretó y firmó: doy fé.—*Isidro Aleman.*—*Silverio Arteaga.*

Es copia que certifico. Aguascalientes, 22 de Octubre de 1873.—*Silverio Arteaga*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia*

México, Noviembre 11 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido por el C. Timoteo Segovia, contra la providencia del Gefe político de Aguascalientes, en virtud de la que el expresado Segovia fué trasladado de la cárcel de dicha ciudad, donde estaba extinguiendo su condena de ocho años de prisión por el delito de homicidio, al Hospital Civil de la misma poblacion, con órden á la guardia de mantener incomunicado á Segovia, se decretar que por sus propios legales fundamentos, es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Aguascalientes en 21 de Octubre próximo pasado, que declara; Primero: la Justicia de la Union ampara y protege á Timoteo Segovia, contra el procedimiento del Gefe político de dicha capital, que lo mandó poner incomunicado en el cuerpo de Guardia del Hospital Civil, por violarse en su persona la garantía consignada en la parte final del artículo 19 de la Constitución. Segundo: la misma no ampara ni protege al citado Segovia, en la violación del artículo 21 del pacto federal, por no existir la violación alegada.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidentes y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordáz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico: Mexico, 15 de Noviembre de 1873. *Emilio Ordaz*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Jalisco por el C. Saturnino Vázquez; contra la sentencia pronunciada por el C. Administrador de rentas de San Pedro y confirmada por el Gobernador del Estado, condenandolo al pago de derechos triples.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Saturnino Vázquez conducía de Monterey para esta ciudad, Tepic, Sayula, Zapotlan y Colima, cuatrocientas arrobas de sebo macho, cubiertas con una guía y tres pases expedidos por la Administración de rentas del Fresnillo, Estado de Zacatecas. Al pasar por el puente de Tololotlan á 7 leguas de Guadalajara, fué aprehendida la carga por el recaudador C. José Berni, según lo prevenido por el artículo cuarto del decreto del Estado número 323, por no venir los documentos requisitados con las notas de presentación y afianzamiento de derechos en el primer alcabalatorio del tránsito por Jalisco, que previene dicho artículo; y habiéndose elegido por el conductor la vía administrativa, ejerciendo la facultad que concede el decreto también del Estado, de Octubre 28 de 1872, el Administrador de rentas sustanció el juicio respectivo y declaró el contrabando, penado con la mitad del valor del efecto, por el artículo sexto del citado decreto 323; Vázquez apeló de la sentencia, y al confirmarla en segunda instancia el C. Gobernador, por equidad y en uso de las facultades extraordinarias que tiene, redujo la pena á pagar derechos triples.

Contra la ejecución de ese fallo se ha presentado el Lic. Emeterio Robles Gil, apoderado de Vázquez, pidiendo amparo con fundamento de las fracciones primera y segunda del artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869, porque según alega, se ataca la garantía otorgada por el artículo 21 de la Constitución federal, al haber sido Vázquez juzgado y sentenciado por la autoridad administrativa, y porque se ha hecho aplicación en el juicio, del decreto 323, que por establecer restricciones onerosas al comercio de Estado á Estado, peca contra la fracción novena del artículo 72 de la misma Constitución.

A solicitud del amparante y de conformidad con lo pedido por este ministerio, el juzgado decretó la suspensión del acto reclamado, debiendo resolver en seguida sobre lo principal.

El Promotor cree, que en el procedimiento administrativo seguido contra Vázquez y en el fallo que se trata de ejecutar por el Administrador de rentas de San Pedro, no se han infringido ni se atacan los artículos 21 y 72 de la Constitución. Si contra el amparante se siguió la vía administrativa y no la judicial, fué porque él mismo así lo quiso, eligiendo aquella según la facultad que le concedía la ley de Octubre 28 de 1872; porque de su espontánea voluntad constituyó juez al empleado de San Pedro; porque trató de evitar que su negocio quedara sujeto á los procedimientos largos, embarazosos y molestos de los tribunales, lo que está permitido también por las leyes federales, y no peca contra el artículo 21 de la Constitución, como lo están por el derecho común, y no pecan contra la carta federal los arbitrajes que diariamente se ven entre los particulares, sobre multitud de cuestiones de la competencia judicial. Y por otra parte, si por el decreto 323 de la Legislatura del Estado, artículo tercero, se tiene prevenido, con el fin único de evitar los contrabandos, que los efectos introducidos al territorio de Jalisco deberán garantizar los